

C.A. de Temuco

Temuco, trece de julio de dos mil veintidós.

Al escrito folio 35, a lo principal, primer y segundo otrosí del escrito folio 36, a lo principal y otrosí de los escritos folios 37, 38 y 39: Téngase presente.

VISTOS:

En cuanto al incidente deducido por el abogado don Juan Jara Müller:

Atendido el mérito de los antecedentes, teniendo presente la naturaleza de los recursos que nos convocan, que lo que buscan tutelar una correcta sustanciación del procedimiento y desde esa perspectiva, todo interviniente dentro de un procedimiento tiene interés en aquello y por lo menos, en ser oído respecto de como razonablemente deberían entenderse ciertas normas de ritualidad procesal y la pertinencia o no de un recurso, que finalmente puede terminar afectando una causa, desde la perspectiva del fondo, a pesar de ser un tema netamente procedimental. Desde esa perspectiva, es razonable que todos los intervinientes tengan derecho a ser oídos en un recurso como este. En segundo término, se debe considerar que no existe alguna norma que exige un interés particular respecto, por ejemplo, de un petitorio, o de haberse hecho parte, razones por las que se rechaza la incidencia deducida, y en consecuencia, se procederá a escuchar a todos los intervinientes en la presente causa.

En cuanto al fondo del recurso de hecho deducido:

Al folio N° 1, comparece don Juan Javier Jara Müller, abogado, con domicilio en A. Varas 687 Of. 909 de Temuco; representación -como se acredita- Patricio Marín Lazo, e interpone recurso de hecho en contra de la resolución de fecha 19 de mayo de 2022, pronunciada por la Jueza de Garantía de Temuco, señora Marcia Patricia Castillo Monjes, en los autos RIT 410-2018, RUC N° 1810002236-9, que concedió la apelación deducida por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando sea admitido a tramitación y, en



definitiva, se acoja, declarando improcedente la apelación deducida, con expresa condena en costas en caso de oposición. Todo lo anterior por los siguientes fundamentos:

i. Antecedentes preliminares

La improcedente apelación interpuesta el 17 de mayo de 2022 por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se originan como lo señala en su presentación, en los siguientes fundamentos, respecto de la resolución contra la que recurre: "... (i) aplica una sanción improcedente bajo la excusa de no haber corregido un vicio formal, cuando en realidad el supuesto vicio era un elemento sustantivo o de legitimación activa; (ii) contraviene lo ya resuelto por la Itma. Corte de Apelaciones de Temuco, infringiendo con ello la institución de la cosa juzgada; (iii) infringe el desasimiento del tribunal; (iv) vulnera asimismo los plazos judicialmente impuestos. La resolución impugnada ha generado un perjuicio al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien ha sido infundadamente excluido como interviniente del proceso penal conocido en estos autos. ..."

2. Argumento invocado por los recurrentes para sostener la procedencia de la apelación interpuesta.

Las apelación interpuesta plantea su supuesta procedencia de acuerdo con lo que dispone el artículo 370 letra a) del Código Procesal Penal, que lo concede respecto de resoluciones que "pusieren término al procedimiento o hicieren imposible su prosecución", entendiendo el recurrente que "la resolución impugnada puso término al procedimiento o hizo imposible la prosecución respecto de este interviniente, desde que ha sido marginado del proceso por medio de la declaración de no presentación de la acusación particular".

3. Improcedencia de la apelación deducida.

La apelación intentada resulta improcedente por cuanto no se contempla en ninguno de los literales del artículo 370 del Código Procesal Penal, ni tampoco en otra hipótesis legal, que por lo demás no se ha invocado, ni fundamentado.



a. La resolución no pone término al juicio ni hace imposible su prosecución (artículo 370 letra a) Código Procesal Penal)

A pesar de lo que sostiene el recurrente, lo cierto es que la letra a) del artículo 370, regula aquellas decisiones terminales del procedimiento, que justamente le ponen término o hacen imposible su prosecución, pero en términos absolutos o generales y no en particular para un determinado interviniente afectado por una sanción procesal -cuyo es el caso del recurrente- por no cumplir con una determinada carga o que sencillamente por su propio hecho o acto, se ha puesto en situación de que se le aplique un consecuencia o sanción procesal.

De darle esa forzada interpretación a la norma, que por lo demás contradice su texto y sentido, significaría que, por ejemplo, un defensor cuya defensa se ha declarado abandonada, por su propia desidia, tendría a su disposición un recurso de apelación, en circunstancias que ello no es admisible, por no tratarse de una hipótesis expresamente contemplada en el literal que se invoca.

b. La resolución recurrida no contempla expresamente un recurso como medio de impugnación (artículo 370 letra b) Código Procesal Penal)

Tampoco es correcto señalar que la decisión del a quo que ha tenido por no presentada la acusación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que por lo demás, sólo ha aplicado la consecuencia prevista en la ley, frente a la contumacia ofrecida por el ahora recurrente, tenga contemplado el recurso de apelación expresamente.

Como es sabido el recurso de apelación en el sistema procesal penal es de carácter excepcional. Para el caso de la audiencia de preparación en efecto se contemplan ciertas resoluciones que el legislador estimó expresamente apelables, pero entre ellas no se encuentra la que es motivo del presente recurso de hecho.

De haberse contemplado un recurso, el legislador lo habría indicado, como ocurre sabidamente, respecto de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, porque lo señala así el artículo 271,



inciso segundo, del Código Procesal Penal o bien el auto de apertura -en rigor las exclusiones probatorias- sólo respecto de determinadas materias y exclusivamente en favor del Ministerio Público, como lo señala el artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal.

Incluso en la hipótesis de resistencia o contumacia a corregir vicios formales que es lo que el apelante ha estimado por sí y ante así apelable, la ley no ha contemplado apelación para dicha resolución -a diferencia de todos los casos antes señalados- y sin embargo, por aplicación de reglas que se encuentran en otras partes del Código Procesal Penal, si permitiría el recurso de apelación, indirectamente, pero para otra hipótesis: aquella en que no existiendo querellante particular, el Ministerio Público no se allana a corregir los vicios y entonces se dicta el sobreseimiento definitivo. Pero en este caso, la decisión será apelable sólo en cuanto el sobreseimiento definitivo es apelable, porque así lo dispone expresamente el artículo 253 del Código Procesal Penal.

Esto último solo hace más evidente aún que ni la resolución que ordena corregir vicios al querellante particular -que ya ha sido intentada impugnar por el Ministerio del Interior por medio de un recurso de queja declarado inadmisible- ni tampoco la que hace efectiva la consecuencia expresamente contemplada en la ley, resultan apelables.

Esto último, la inapelabilidad de la resolución que aplica la sanción procesal es bastante lógica por lo demás, puesto que la pérdida de la calidad de interviniente se ha debido a la propia negligencia o rebeldía del contumaz, a quien le basta someterse a la ley y a la decisión del tribunal para evitar la consecuencia que ahora estima írrita. Pero el procedimiento no termina, ni se suspende, ni se hace imposible su prosecución, por el contrario, continúa adelante con los restantes intervinientes, con los que han sido diligentes.

c. La resolución recurrida no es encuadrable en otras hipótesis, ni se puede conceder un recurso por analogía



El recurrente deja insinuado en su recurso que la aplicación del artículo 270 inciso segundo, que es lo verdaderamente impugnado por el Ministerio del Interior, "tiene el inexorable efecto de declarar abandonada la querella en los términos del artículo 120 del Código Procesal Penal. Así lo sostiene no al fundamentar la procedencia del recurso, sino que al fundamentar el agravio.

Esta sola consideración demuestra que en efecto la resolución que declara abandonada la querella, resultaría apelable si en verdad fuera la resolución que se hubiera dictado y la que se hubiera impugnado. Al mismo tiempo demuestra que esa hipótesis, que además no concurre, a pesar de la inexorabilidad que preconiza el apelante, en la sede de demostrar agravios más no en la de defender la apelabilidad, en efecto contempla expresamente el recurso de apelación, a diferencia de la resolución que aplica el inciso segundo del artículo 270, que no lo contempla.

Pues bien, igualmente viene al caso señalar, que no es posible aplicar la hipótesis de apelabilidad del abandono de la querella, por las siguientes razones:

(i) Prohibición de extra petita recursiva. En primer lugar por lo que dispone el artículo 360 del Código Procesal Penal, que consagra la prohibición de extra petita recursiva. Señala el artículo 360 en lo pertinente: "... El tribunal que conociere de un recurso solo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado..."

En consecuencia, no habiendo fundamentado el recurrente la procedencia del su recurso en una norma que expresamente lo contemplaría, sino que en la hipótesis de la letra a) del artículo 370, no puede la Iltrma. Corte complementar o suplir la fundamentación de la procedencia del recurso, extendiéndolo a puntos no expresamente solicitados.



(ii) No estamos en la hipótesis de abandono de la querella. A pesar de lo inexorable que considera el recurrente -como fundamento de su agravio- el advenimiento del abandono de la querella, lo cierto es que no estamos en ninguna de las tres hipótesis del artículo 120 del Código Procesal Penal, que señala:

"... El tribunal de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, declarará abandonada la querella por quien la hubiere interpuesto:

- a) Cuando no adhiriere a la acusación fiscal o no acusare particularmente en la oportunidad que correspondiere;
- b) Cuando no asistiere a la audiencia de preparación del juicio oral sin causa debidamente justificada, y
- c) Cuando no concurriere a la audiencia de juicio oral o se ausentare de ella sin autorización del tribunal. ..."

(iii) La decisión sobre abandono de la querella no se ha pronunciado. A mayor abundamiento, aún si se considerara procedente declarar el abandono de la querella, como queda claro en el acta de la audiencia de 12 de mayo de 2022, que señala en la parte pertinente:

"...Resuelve solicitud abandono querella: Respecto de esa solicitud y teniendo en consideración que el efecto del 270 es específico y por ahora también había una apelación pendiente, expresamente no me pronuncio respecto de la segunda parte, sin perjuicio de que me pueda pronunciar en su unidad..."

Por lo que esa decisión ha quedado diferida. (iv) No se puede conceder un recurso por analogía.- Por último, y a pesar de lo insinuado por el recurrente, respecto del virtual o inexorable abandono de la querella, lo cierto es que tal decisión no es lo que realmente se ha decidido en la causa, de manera que pretender que la decisión sería tan apelable como si se tratara de un abandono de querella, no sólo hace evidente que lo que realmente entiende el recurrente es que existiría un recurso para la hipótesis futura de abandono de querella, sino que además, de concederse este recurso, se estaría aplicando tan



sólo por analogía, dado el efecto inexorable que traería aparejada la resolución que aplica la sanción procesal, por la propia desidia del recurrente.

(v) No se recurre contra la resolución que ordenó corregir el vicio formal del 9 de mayo de 2022, y que por no ser acatada, se aplica al apelante la sanción del Art. 270 inc. 30 del Código Procesal Penal, como tampoco se expresa en el petitorio que se deje sin efecto, siendo esta resolución del 9 de mayo de 2022, el antecedente de la resolución recurrida del 12 de mayo de 2022 que aplica la sanción señalada.

En efecto, resulta de manifiesto que no se recurre contra la resolución del 9 de mayo de 2022, que ordenó corregir el vicio formal y que por no ser acatada, se aplicó al apelante la sanción del Art. 270 inc. 3o del Código Procesal Penal, como tampoco expresó en su petitorio que la deje sin efecto, siendo esta resolución del 9 de mayo de 2022, el antecedente de la resolución recurrida del 12 de mayo de 2022 que aplica la sanción señalada.

De este modo, al quedar ejecutoriada la resolución del 9 de mayo de 2022, por la falta de apelación en su contra, el propio recurrente por la omisión de su actuación procesal ha hecho que el agravio no concurra, pues se conformó con lo resuelto y consecuentemente con ello admite su resultado, cual es que frente a la omisión de corrección del vicio formal ordenado, sea impedido de continuar como interviniente.

Por lo anterior acogerlo en todas sus partes declarando inadmisibile el recurso de apelación de fecha 17 de mayo de 2022 interpuesto por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con expresa condena en costas en caso de oposición.

Documentos:

1. Acta de audiencia de 12 de mayo de 2022, en autos RIT 410-2018 y RUC 1810002236-9 seguidos ante el Juzgado de Garantía de Temuco.



2. Recurso de apelación de fecha 17 de mayo de 2022, deducido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en autos RIT 410-2018 y RUC 1810002236-9 seguidos ante el Juzgado de Garantía de Temuco.

3. Resolución de fecha 19 de mayo de 2022 de autos RIT 410-2018 y RUC 1810002236-9 seguidos ante el Juzgado de Garantía de Temuco.

Al folio N° 3, se trajo a la vista causa Penal 412-2022.

Al folio N° 11, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de hecho tiene por objeto obtener que el tribunal superior enmiende conforme a derecho el agravio ocasionado por el inferior al pronunciarse sobre un recurso de apelación, cuando éste ha sido denegado siendo procedente, o ha sido concedido siendo improcedente; cuando se ha concedido en ambos efectos debiendo otorgarse en el solo efecto devolutivo, o finalmente, cuando se ha concedido en el solo efecto devolutivo correspondiendo hacerlo en ambos efectos.

Así, y según el caso de que se trata, se habla en doctrina del verdadero o falso recurso de hecho.

SEGUNDO: Que, en el caso de autos se trata de un falso recurso de hecho, intentado en contra de la resolución de 19 de mayo de 2022, dictada por la Juez titular Marcia Castillo Monje, en la causa RIT 410-2018, por la cual se concedió un recurso de apelación, deducido por la querellante particular Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de la resolución dictada en audiencia el 12 de mayo de 2022, que tuvo por no presentada la acusación particular, deducida por dicho interviniente, por no haber corregido los vicios formales contenidos en ella, tal como se ordenó mediante resolución del 9 de mayo de 2022.

TERCERO: Que primeramente, debe analizarse, cuál es la norma procesal que otorga este remedio procesal. Para ello debe



revisarse, el artículo 370 del Código Procesal Penal, el cual dispone, que son apelables ante el juez de garantía las resoluciones: a) Cuando pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o la suspendieren por más de treinta días, y b) Cuando la ley lo señalare expresamente.

Efectivamente, observando los antecedentes vertidos en autos, es posible establecer que la resolución recurrida, no suspende el procedimiento ni poner término al mismo ni hace imposible su prosecución, ya que estos antecedentes continúan sustanciándose en relación a todos los demás intervinientes, por lo que no concurren los supuestos fácticos para aplicar esta parte de la norma señalada.

Ahora bien, en cuanto a la letra b) del artículo 370 del Código Procesal Penal, cabe añadir que tampoco existe norma alguna del mismo cuerpo legal o ley especial que conceda expresamente este recurso, menos considerando la etapa de preparación de juicio oral en la que se encuentra el proceso, y que de acuerdo a los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal, se restringen los medios de impugnación de resoluciones dictadas en ella.

CUARTO: Que por su parte, esta Corte tampoco estima que estemos en la hipótesis del artículo 120 del Código Procesal Penal, puesto que no se ha declarado el abandono de la querella particular, resolución que se encuentra pendiente de ser dictada, tal como lo indica la Juez en la audiencia del 12 de mayo de 2022.

QUINTO: Que así las cosas y tras lo analizado, resulta evidente que la resolución impugnada en estos autos no es apelable, por lo que se procederá a acoger este falso recurso de hecho, tal como se dirá a continuación.

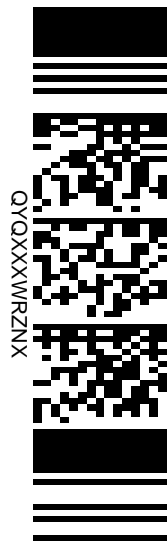
Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos ya señalados, todos del Código Procesal Penal, **SE ACOGE** el recurso de hecho deducido en estos antecedentes, y en consecuencia se declara **inadmisible el recurso de apelación** deducido por la querellante Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en contra de la



resolución de doce de mayo del año en curso, dictada en los autos en causa RUC 1810002236-9, RIT 410-2018, del Juzgado de Garantía de Temuco, que tuvo por no presentada la acusación particular de la apelante.

Regístrese y agréguese copia a la apelación Rol 412-2022 de esta Corte.

Rol N° Penal-431-2022 (pvb).



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por Ministro Presidente Jose H. Marinello F. y los Ministros (as) Adriana Cecilia Aravena L., Maria Georgina Gutierrez A. Temuco, trece de julio de dos mil veintidós.

En Temuco, a trece de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

